

línea de confusión idiomática se emplea el nombre de cheque que identifica claramente a una orden de pago para denominar a un instrumento de crédito. Por mucho que se cambie el nombre, el cheque de pago diferido es y seguirá siendo un instrumento de crédito. Yo no me opongo a su creación. Creo que no es el camino adecuado para aumentar el crédito. Me opongo sí a su registro, ya que creo que el Banco Central deberá recurrir a procedimientos más creativos para conseguir

su objetivo, de conocer el volumen total de endeudamiento de una determinada persona o empresa.

Hay un número significativo de observaciones que realizaremos en el debate en particular una vez que conozcamos el proyecto que en definitiva se va a aprobar, ya que notamos por los discursos que nos precedieron, especialmente los de las bancadas mayoritarias, que se ha alcanzado un "consenso" que habría hecho desaparecer los dictámenes de mayoría y minoría.

6

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO RODRIGUEZ SANUDO

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre libertad por agotamiento de los plazos de la prisión preventiva

No puedo dejar de expresar mi enorme satisfacción en razón de que, más allá de diferencias de criterio, estemos hoy tratando, debatiendo, y —sin duda— llegando a un acuerdo básico en lo que respecta al resguardo de una de las garantías fundamentales del estado de derecho y del derecho penal liberal.

Es principio de inocencia, el reconocimiento indiscutible de que los habitantes de nuestro país deben ser considerados inocentes hasta que una sentencia de condena declare su culpabilidad en el marco de todas las posibilidades defensivas y formalidades republicanas.

El mantenimiento básico de esta garantía y de todas sus consecuencias directas no podía hacerse esperar un solo segundo más.

Quizás estemos ante una de las grandes deudas del gran avance que significó la implementación del juicio oral, e incluso ante un retroceso en relación a la manifestación normativa del plazo máximo de dos años que disponía el Código Procesal Penal de la Nación anterior al vigente, por el juego de los artículos 701 y 379, inciso 6.

Pero creo que es absolutamente necesario, antes de entrar en el análisis del proyecto, establecer a grandes rasgos las características principales del instituto de la prisión preventiva.

Y ello se justifica debido a que hace bastante tiempo que en la opinión pública, en algunos medios de comunicación e, incluso, entre nosotros, legisladores de la Nación, se presentan de manera algo confusa, cuando no directamente equivocada, las características distintivas entre la pena —es decir, la coerción material— y la prisión preventiva —es decir, la coerción procesal—.

A veces, llegando a exigir al instituto sobre el que hoy legislamos, funciones propias de la pena misma.

Pena y prisión preventiva deben ser claramente diferenciadas, en primer lugar, a partir de los propios fines de cada una. En el caso de la prisión preventiva, sus objetivos sólo pueden ser aquellos vinculados con el resguardo de los fines del mismo proceso penal: averiguar la verdad y realizar la acción penal. Y nada tienen que ver aquí aquellos fines preventivos o retributivos adjudicados en forma general a la sanción penal estatal.

Por todo ello, la ciencia del derecho procesal penal universal ha dictaminado, con convicción unánime, que los únicos fundamentos de la prisión preventiva pueden ser —legítimamente— el peligro de la fuga del imputado o el peligro de que éste obstaculice la averiguación de la verdad, debido a que —a diferencia del derecho procesal realizador del derecho privado— no es concebible, por imperio de la garantía constitucional de la defensa en juicio, el juzgamiento en rebeldía, por lo que la ausencia del imputado impide la realización del juicio y anula la efectividad del proceso penal.

Esta concepción, única razonable constitucionalmente, reniega de cualquier atributo sancionatorio del instituto.

Todo el funcionamiento de la prisión preventiva no puede evitar tomar en cuenta, sin embargo, que el imputado todavía es inocente y sobre él rige lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional en cuanto a la limitación estatal de no sancionar hasta tanto una sentencia jurisdiccional declare la culpabilidad.

Ello implica que la legislación procesal es reglamentaria, como muchas veces sucede, de la garantía constitucional de la presunción de inocencia y del juicio previo. Y, como toda reglamentación, no puede desnaturalizar la garantía establecida por el constituyente.

Por eso se hace imperioso establecer los límites del uso de la prisión preventiva.

Límites relativos a la procedencia formal, a la regulación del uso estatal del instituto en forma excepcional y a la proporcionalidad de la medida.

El carácter excepcional de la prisión preventiva surge de la combinación con el derecho general a la libertad ambulatoria establecido en el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental.

En el derecho comparado se tiende con fuerza constante a establecer, en este marco, límites absolutos, nunca superables, al uso por parte del Estado de la medida procesal aquí legislada. Incluso esta exigencia de limitar temporalmente a la prisión preventiva ha adquirido un lugar en las Constituciones de ciertos países, como Italia y España.

Asimismo, la necesidad de una prisión preventiva limitada en el tiempo surge de la duración razonable de la persecución penal, garantía establecida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General, ONU, Resolución 2.200 —XXI— 14-12-1966), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San

José de Costa Rica (artículo 8º, número 1) y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 6º, número 1).

En definitiva —nuevamente— estamos ante la necesidad de encontrar un punto razonable de equilibrio entre la protección de los derechos individuales y el resguardo de la eficacia del Estado en la administración de la justicia.

No quisiera utilizar este valioso tiempo para manifestar sólo mi conformidad con esta idea general. Para ello alcanza con recordar que, personalmente, he presentado un proyecto en el mismo sentido político-criminal general, que fue considerado por la Comisión de Legislación Penal al remitir el dictamen que aquí se considera.

La distinción y clarificación hechas precedentemente tienen por objeto fundamentar algunas disidencias con la iniciativa que ha tenido acuerdo en la comisión, fundadas todas ellas en la convicción de que el único derecho que debe ser limitado es la libertad personal y ello en la mínima medida razonable para garantizar un proceso penal eficaz pero respetuoso de las garantías individuales.

En primer lugar, ya en el proyecto de mi autoría se establecía como causal de excarcelación el grave incumplimiento, establecido por el juez, de las condiciones de tratamiento de los presos preventivos que establece el artículo 313 del nuevo Código Procesal Penal; de otro modo, esa norma se transformará con el tiempo en una emocionante declaración de principios, pero sin ninguna vigencia práctica; una verdadera norma imperfecta, incompleta, que no establece consecuencia alguna frente a su incumplimiento.

El dictamen de comisión que se trata aquí tiene, en forma manifiesta, pretensiones de legislar en forma uni-

voca para todo el país. Es por ello que la propuesta recién expresada no podría referirse sólo a un artículo del Código Procesal federal. Sin embargo, nada impide la introducción de un artículo similar que haga mención a temas tan importantes como el alojamiento en establecimientos diferentes a los penados, separación por razones de edad, sexo, educación, antecedentes y naturaleza del delito, asistencia médica, posibilidad de recibir visitas íntimas, uso de los medios de correspondencia, etcétera.

Los últimos acontecimientos han demostrado la necesidad de que el Congreso de la Nación dirija la mirada a estas cuestiones de tanta gravedad. El mismo ministro de Justicia de la Nación ha explicado los planes que, desde ese organismo, se tienen para que el cumplimiento de estos derechos no sea una utopía. Es por ello que desde este recinto, cuando estamos definiendo problemas de la máxima gravedad político criminal, debemos asegurarnos de incentivar y apoyar esa propuesta, asegurando el cumplimiento de las condiciones de tratamiento citadas.

Por otro lado, quiero expresar mi opinión en el sentido favorable a un plazo máximo de duración de la prisión preventiva que nunca supere los dos años y medio, teniendo en cuenta que, cumplidos dos años, la extensión debe ser autorizada por una instancia superior desde el punto de vista jurisdiccional.

Asimismo, esta ley reglamentaria no debería quitar efectividad a las normas procesales provinciales que regulen la prisión preventiva de modo más favorable al imputado.

Por último, cuando en el dictamen de comisión se incluye el establecimiento de la caución, se debería incluir una norma en la cual se obliga al juez de la causa a tomar en cuenta la posibilidad económica del imputado, a efectos de que no se transforme en una verdadera limitación selectiva.